



## Contribución de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears para la Nueva Estrategia 2020 de la UE

Tras el incumplimiento de los objetivos de la Estrategia de Lisboa, la UE debe poner en marcha una nueva estrategia capaz de aumentar la competitividad de la economía europea en un mundo cada vez más globalizado e interconectado. Todo ello no debe comprometer los objetivos de cohesión económica, social y territorial, ésta última introducida por el Tratado de Lisboa, que recientemente ha entrado en vigor.

Para avanzar hacia una Europa más competitiva y cumplir con estos objetivos de cohesión, las políticas europeas, y particularmente la política regional, deben basarse en un conjunto de indicadores que se reflejen en la presumiblemente nueva Estrategia 2020, y que vayan más allá del tradicional PIB por habitante. Se deben establecer nuevos indicadores que permitan medir con mayor exactitud, no sólo el rendimiento económico, sino también el bienestar y la calidad de vida en los diferentes territorios europeos. Algunos de los indicadores a incluir deberían ser:

- El gasto en I+D+i teniendo en cuenta el PIB de la región/estado, o el número de patentes por habitante.
- El nivel educacional de la población, así como la implicación de ésta en los sistemas de educación a lo largo de la vida o en el nivel terciario de educación;
- El porcentaje de trabajos que realmente aportan un valor añadido a las economías; siempre teniendo en cuenta la estacionalidad de la ocupación o la tasa de empleos a tiempo completo en base anual;
- El nivel de acceso a Internet por parte de la población; o el grado de utilización de las TIC por parte de las empresas.
- Indicadores de índole social y medioambiental que midan aspectos como: la pobreza, la distribución de renta, los niveles de CO2 y otras emisiones o el impacto en la biodiversidad entre otros.

Todos estos indicadores miden aspectos en los que cualquier economía del conocimiento sostenible debería intentar progresar para asegurar su competitividad a largo plazo. La crisis económica global ha puesto de manifiesto la necesidad de progresar en todos estos ámbitos. Todo ello debería repercutir también en la creación de mejores empleos, hecho que a su vez depende de la existencia de unos buenos sistemas de formación y educación que posibiliten además la reinserción laboral de aquéllos afectados por las reestructuraciones económicas que suelen seguir a los períodos de recesión. En el contexto actual, incrementar la creación de empleo a través del fomento del espíritu empresarial, la promoción de la formación



del capital humano, la innovación o la compleción del mercado interior, debe contribuir a aumentar el potencial de crecimiento y a mejorar las finanzas públicas a largo plazo.

La política regional europea ha servido para que las autoridades regionales europeas, incluidas las Comunidades Autónomas españolas, dirijan sus políticas de desarrollo hacia objetivos reflejados en los indicadores propuestos previamente. En este sentido, la política regional ha servido como impulsora de una gran inversión por parte de las autoridades regionales. No obstante, la política regional sigue manteniendo una serie de defectos que impiden que regiones con dificultades geográficas específicas, como las insulares, puedan poner en marcha todos sus potenciales de desarrollo. Por ello se hace necesaria una remodelación de esta política para que dichas regiones puedan superar sus dificultades.

Una política de desarrollo integrada como es la política regional europea sigue siendo necesaria a nivel comunitario para que las regiones puedan programar en función de sus necesidades, hecho que imposibilitaría una *sectorialización* de la inversión europea en diferentes políticas. Además, dicha inversión debe estar territorializada, preservando y aumentando el poder de las autoridades regionales ya que son éstas las que se encuentran más próximas a los ciudadanos y a las empresas. En este sentido la política regional europea ha mostrado su eficiencia. La nueva Estrategia debería tener en cuenta la estructura establecida de gobernanza multinivel para aplicar los programas existentes de Fondos Estructurales.

Así pues, el enfoque territorial debe mantenerse en el diseño y la implementación de la nueva estrategia europea. Las existentes Estrategias de Lisboa y Gotemburgo no han permitido la implicación directa deseable por parte de las autoridades regionales europeas. Todo ello ha presentado problemas de apropiación sobre el terreno. La nueva Estrategia debería solucionar estas deficiencias a través de una mayor implicación del nivel subnacional, para que las regiones la vean como propia, adaptándola a sus necesidades particulares y participando en su implementación. Por ello se debería poner en marcha un acuerdo político sobre la nueva Estrategia que implicase a todos los niveles de gobierno, incluyendo el comunitario, el estatal y el regional, para que éste último esté implicado directamente y comprometido en la implementación teniendo en cuenta sus competencias.

Por otra parte, el Mercado Único Europeo viene mostrándose como el principal instrumento al servicio de la UE para aumentar la competitividad de su economía. No obstante, hay que seguir avanzando en este mercado único para llegar a su compleción, siempre teniendo en cuenta que muchas regiones europeas, en particular aquéllas con unas características geográficas específicas, se enfrentan a una serie de dificultades que les impiden participar en el mercado único europeo en



pie de igualdad respecto al resto de territorios de la UE. Las PYME siguen siendo de vital importancia para la economía europea y su posibilidad de aprovechar las ventajas que ofrece el mercado interior debería asegurarse a todas ellas, independientemente de la ubicación de su sede. Por ello, una Europa competitiva y cohesionada debería facilitar el pleno acceso de sus islas –incluyendo a sus ciudadanos y empresas- al mercado interior, y para ello una política de transporte eficaz se muestra como un elemento indispensable. Por ello, la política europea de transportes debe incluir como objetivo la existencia de conexiones estables y competitivas entre las regiones insulares y el centro europeo, tanto para el transporte de personas como para el de mercancías.

El avance hacia la competitividad de la economía europea no debe abandonar el propósito de avanzar hacia la cohesión social y la inclusión. El Modelo Social Europeo debe consolidarse y el acceso a los servicios de interés general debe garantizarse a todo ciudadano. Una vez más, la política regional se presenta como un instrumento fundamental para la lucha contra la exclusión social.

Otra dimensión de vital importancia en la nueva estrategia europea debe ser la sostenibilidad de la economía. Dicha sostenibilidad debe reflejarse en una serie de objetivos medioambientales bien definidos que incluyan la preservación de la biodiversidad, y en particular de los endemismos existentes en el territorio europeo.

Por último, y ligado a la sostenibilidad medioambiental, cualquier economía competitiva que pretenda perdurar como tal, debe tener en cuenta los desafíos energéticos a los que se está enfrentando el mundo y que van a agudizarse en el futuro. Por ello, el desarrollo de las energías renovables y la modernización de los servicios de ocio deben incluirse como acciones de la nueva Estrategia. Todo ello no sólo es un imperativo para avanzar hacia una economía sostenible y baja en emisiones, sino que al mismo tiempo abre nuevos campos donde invertir con buenas perspectivas de futuro y con la posibilidad de crear nuevos empleos.

Otro importante desafío ligado al energético es el del cambio climático, que no afectará del mismo modo a todas las regiones europeas. Aquellas regiones más vulnerables, como las insulares, que a menudo tienen poca responsabilidad en el cambio pero que sufren en mayor grado sus consecuencias, deberían ser objeto de una especial atención por parte de la UE.

El desarrollo de la competitividad europea debe basarse en una economía respetuosa con el medioambiente y sostenible en lo social. Europa debe jugar un papel de liderazgo en la transformación de la economía global. Todo ello sólo es posible si se ofrece prioridad a los aspectos que se han ido mencionando: la inversión en tecnologías ecológicas e I+D, la eficiencia energética, la producción y



consumo sostenibles, las tecnologías de información y comunicación y las infraestructuras de banda ancha. Por último, no hay que olvidar que el progreso hacia competitividad de la economía europea debe acompañarse de un avance en la cohesión económica, social y territorial de la UE.